

ARGENTINA, ENTRE LOS '70 Y EL PRESENTE

Prof. Nélica A. Diburzi*

Introducción

Al iniciar este Manual para alumnos-Segunda sección, hacíamos referencia a la bibliografía específica, a la que pertenece el presente texto. Decíamos en ese inicio que los contenidos propuestos refieren al pasado reciente, ampliando y profundizando los aportes de la bibliografía básica, por lo cual aconsejábamos un trabajo permanente de "ida y vuelta" entre ésta y la bibliografía específica, para una mejor comprensión.

Los textos que siguen presentan un mayor nivel de complejidad por lo cual se hace necesario un trabajo intelectual exigente y un aporte orientador muy importante por parte de los profesores tutores.

Nuestro pasado reciente es objeto de estudio de diferentes disciplinas sociales, entre ellas la llamada Historia del Tiempo Presente - entre otras denominaciones- Una cuestión central en estas últimas décadas es la crisis del mundo del trabajo o el "fin del trabajo", cuestión con la cual ahondamos la temática general: "Cambios en los procesos de trabajo en las sociedades capitalistas", que estudiamos, en esta segunda sección del Manual para alumnos, específicamente en el caso argentino.

Entre los años 70 y el presente

Para el análisis de la crisis de la sociedad del trabajo y las formas de la acción colectiva en nuestro país es fundamental el tratamiento de la década del 90, sin por ello desconocer que tal crisis se inserta en una temporalidad de mayor duración.

Ricardo Sidicaro¹ expresa que los objetivos del gobierno menemista fueron reducir la intervención del Estado en el plano económico y social y favorecer a los actores socio-económicos predominantes², nacionales y extranjeros, ofreciendo grandes posibilidades de ganancias a las inversiones transnacionales (Sidicaro, 2002:161)³.

Una afirmación tan rotunda, que prácticamente define lo que para el autor significó el gobierno de Carlos Menem, supone la comprensión al menos de tres grandes cuestiones: a) la transnacionalización capitalista, b) el proceso histórico argentino entre los años setenta y la actualidad -por las proyecciones presentes de las políticas implementadas en los años 90- y c) el fortalecimiento de los actores arriba mencionados y la crisis estatal en el contexto de las mencionadas políticas.

LECTURA

4- El peronismo contra el Estado: el gobierno 1989-1999

El gobierno presidido por Carlos Menem se inició en una situación caracterizada por la agudización de la crisis de las capacidades estatales. En esas condiciones, el poder de intervención de los actores socioeconómicos predominantes sobre las decisiones públicas había aumentado considerablemente. Por otra parte, los anteriores recursos políticos del peronismo se encontraban debilitados o no existían. El país no tenía los sindicatos fuertes ni los sólidos tejidos laborales de las épocas de las administraciones justicialistas anteriores. Las transformaciones sociales y políticas registradas desde mediados de los años 70 habían

* Profesora de Ciencias Sociales y de Historia. Especialista en Historia Social. Docente investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL)

¹Ricardo Sidicaro es Doctor en Sociología, investigador principal del CONICET (Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), Profesor de la UBA y UNL.

²"Con el concepto de actores socio económicos predominantes hacemos referencia a un heterogéneo conjunto de agentes (grandes empresas, grupos económicos, inversionistas ocasionales, etc.) cuyas actividades gravitan de un modo estratégico sobre el conjunto de la economía nacional y, en consecuencia, sus acciones u omisiones tienen gran importancia sobre el conjunto de las relaciones sociales". Sidicaro, Ricardo. "Sobre algunas consecuencias políticas de la dictadura militar. 1976-1983", en Hugo Quiroga y César Tcach (compiladores), Argentina 1976-2006 Entre la sombra de la dictadura y el futuro de la democracia. UNL - Homo Sapiens Ediciones. Rosario. Santa Fe. Argentina. 2006. Página 32.

³Sidicaro, Ricardo. "Sobre algunas consecuencias...". Obra citada

modificado las bases materiales y las referencias simbólicas de la identidad peronista. El imaginario histórico nacionalista y favorable a la mayor equidad social había perdido buena parte de su capacidad de provisión de sentido de la acción de quienes adherían al justicialismo. Una manifestación fácil de captar de la situación de disolución de las referencias ideológicas peronistas la ofreció el hecho de que cuando Menem orientó su proyecto gubernamental hacia el liberalismo económico no recibió mayores críticas públicas provenientes de su movimiento. Ante sus políticas opuestas a la tradición peronista, sólo sectores marginales emplearon las otrora usuales categorías clasificatorias de "vendepatria" o de "cipayo". El partido justicialista no contaba con bases sociales ideológicamente exigentes y de su seno no emanaron protestas significativas ante los nuevos rumbos menemistas. Los dirigentes y miembros relativamente más reconocidos enfocaron sus esfuerzos a la obtención, para ellos y para sus séquitos, de los beneficios materiales y simbólicos derivados de la ocupación de cargos y empleos públicos

Los antiguos aliados empresarios, que en otras épocas defendían proyectos coincidentes con los del peronismo, habían menguado considerablemente su participación en la vida económica y en los debates políticos. En el centro de la escena empresaria de 1989 sobresalía el protagonismo de algunos grandes grupos económicos de capital nacional, consolidados durante la dictadura y fortalecidos en la gestión alfonsinista, cuyas preocupaciones por incrementar sus beneficios y sus patrimonios los llevaba a buscar decisiones estatales puntuales, con indiferencia del color político de los gobernantes, y los hacía poco propensos a la elaboración de estrategias dirigidas al logro de consensos más amplios. A esos grupos económicos, los medios de prensa, y buena parte de sus críticos, los designaban con el nombre "capitanes de la industria", de connotaciones un tanto laudatorias y alusivas a la producción, pero, en realidad, no faltaban las evidencias empíricas de que sus enriquecimientos estaban ligados a la especulación y a los contratos y ventajas obtenidas de sus relaciones con los aparatos estatales. Por esas prácticas se les asignaba otra denominación, menos elogiosa, "la patria contratista".

Desde la década del 80, la deuda externa se había convertido en un notorio límite de las decisiones públicas, y las moras en los pagos de sus servicios auguraban nuevas y mayores dificultades económicas para el nuevo gobierno peronista. El problema no era sólo argentino y afectaba a muchos países periféricos, y, al respecto, el gobierno norteamericano y los organismos financieros internacionales de supervisión y crédito elaboraron un programa general de alternativas para encontrar una salida a las dificultades de los acreedores y de los deudores en los comienzos de los 90, conocido como el "Consenso de Washington". Ese programa, sugerido o impuesto a los países endeudados, aconsejaba ofrecer ventajas a las inversiones extranjeras, privatizar las empresas estatales y abrir y desregular las economías nacionales.

En fin, al comenzar la década menemista, los diferentes aspectos políticos, sociales y económicos mencionados se combinaron con los efectos del acontecimiento mundial que cerró el siglo XX: la caída del comunismo soviético. Desde la óptica pragmática y realista del peronismo histórico, la nueva situación internacional podía ser interpretada como el fin de la división del mundo establecida en Yalta en 1945 y el comienzo de la dominación unipolar de los EE.UU. Así, desapareció del escenario de tensiones internacionales el eje de las referencias fundadoras de la "tercera posición", y el nuevo gobierno peronista debió definirse frente a lo que en su viejo lenguaje hubiese, seguramente, llamado la "paz imperial norteamericana"

Sidicaro, Ricardo. Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-76/1989-99. Siglo Veintiuno Editores- Argentina, Buenos Aires, Buenos Aires, 2002. Fragmento.

ACTIVIDAD

Para el trabajo con el texto de Ricardo Sidicaro te proponemos lo siguiente:

- Indicar el marco temporal al que corresponden las referencias que aparecen en el texto.
- Subrayar aquellas partes del texto que hagan referencia a la crisis estatal y a los actores socioeconómicos predominantes.
- Explicar la oración: "Las transformaciones sociales y políticas registradas desde mediados de los años 70 habían modificado las bases materiales y las referencias simbólicas de la identidad peronista".
- Establecer las consecuencias de dicha modificación.

Mirando hacia los '70

La crisis de las capacidades estatales y la configuración de los actores socioeconómicos predominantes no se inicia con el menemismo, sino al menos dos décadas antes. Los militares del "Proceso" provenían de un Estado ya desarticulado y de aparatos castrenses desprofesionalizados (de lo cual la guerra de Malvinas dará debida cuenta). Durante la dictadura creció la importancia de aquellos actores socioeconómicos vinculados a los militares, beneficiándose grupos económicos o holdings de capital nacional, en un estilo de desenvolvimiento empresarial que puede denominarse en términos de Weber "capitalismo aventurero", por su orientación a obtener ganancias especulativas y beneficios sin riesgos a través de su relación privilegiada con las cúpulas militares ocupantes de los aparatos estatales.

La apertura de la economía permitió la incorporación de capitales financieros internacionales que, en esa época de gran liquidez, buscaban colocar préstamos y promover niveles de endeudamiento externo a la vez que los grupos económicos nacionales también conseguían préstamos externos.

El poder de los actores socio económicos predominantes creció durante la dictadura al mismo tiempo que decrecían las capacidades estatales; mientras tanto los servicios de la deuda externa consumían gran parte de los recursos fiscales.

La supresión del Estado de Derecho, de la actividad legislativa, la sumisión del poder judicial, la división del poder gubernamental en tercios (ejército, marina, aeronáutica), operadas por la dictadura aceleraron la crisis de los aparatos del Estado. El terrorismo de Estado fue el máximo exponente de estas transformaciones y uno de los factores que lo posibilitaron es el hecho que las altas jerarquías castrenses carecían de referencias más estrictas sobre el cumplimiento de normas y el respeto de ciertos límites comparados con los militares de regímenes autoritarios precedentes. (Sidicaro, 2002:156).

1976 representó el intento de llevar a cabo transformaciones estructurales a través de un reordenamiento político, económico social y cultural por medio de la violencia estatal, clausurando el ciclo abierto en los años cuarenta. En efecto, el terror de Estado tuvo como finalidad acallar a una sociedad movilizadora que se había configurado en los marcos del modelo de desarrollo por sustitución de importaciones y de un Estado redistributivo e intervencionista. Es esta matriz estadocéntrica y las demandas de sectores asalariados (que habían mejorado su situación a la par que crecían en capacidad de movilización), lo que el gobierno militar se propuso dismantelar, al mismo tiempo que aniquilaba a otros actores contestatarios que vislumbraban la posibilidad de generar cambios sistémicos.

Siguiendo planteos de Sidicaro observaremos en particular al peronismo:

Determinados dirigentes del partido fueron encarcelados pero la represión se dirigió en particular a los dirigentes sindicales intermedios⁴ y a miembros de las orientaciones más radicalizadas⁵. Aunque no puede dejar de mencionarse que, como en los demás partidos, hubo dirigentes que aceptaron las reglas del juego impuestas por los militares y también hubo quienes colaboraron con su gobierno.

El deterioro de la estructura productiva y del empleo (que se agudizará en los '90), la caída de los salarios y la protesta laboral reprimida, hizo que en enero de 1977 se difundiera un documento cuestionando la política económica, la prohibición de la actividad gremial y denunciando el revanchismo patronal (el empresariado lograba una de sus demandas a los militares: la destrucción del movimiento sindical).

La huelga general de 1979 marcó el relanzamiento de las luchas sindicales. En 1980, la CGT (secretaría general de Ubaldini) y los sindicatos ampliaron sus marcos de acción en el plano nacional y en el seno del peronismo.

El partido tendrá una cierta visibilidad recién en 1981 en la Multipartidaria Nacional que sin ser un polo cívico de oposición a la dictadura - sino un instrumento de negociación con el gobierno militar (Quiroga, 2006: 80)⁶ -, abrió la discusión con respecto al retorno al régimen democrático. A la vez, economistas del peronismo elaboraban documentos críticos de las políticas del gobierno militar que consideraban contrarias al modelo de desarrollo con justicia social y que resultaban favorables a la especulación, corrupción y al deterioro del papel del Estado; valoraban, en estos documentos, al movimiento obrero organizado como un actor clave en una alianza social opositora.

⁴Nos referimos al sindicalismo peronistas, que para ese entonces tenía gran peso en el peronismo.

⁵Lo que habitualmente se denomina "la izquierda peronista".

⁶Quiroga, Hugo. "La política en tiempos de dictadura y democracia", en Hugo Quiroga y César Tcach (compiladores), Argentina 1976-2006 Entre la sombra de la dictadura y el futuro de la democracia. UNL - Homo Sapiens Ediciones. Rosario. Santa Fe. Argentina.2006.

El autor es profesor de Teoría política y miembro de la carrera de investigador del Consejo de Investigaciones de la UNR.

Paradojalmente, hacia 1982-83, mientras los líderes sindicales alcanzaban gran influencia (observable en la propuesta de candidatos para las elecciones y en la participación en la campaña electoral), sus organizaciones y bases de afiliados decaían. Luego, la derrota en los comicios hizo que el ala gremial apareciera como la gran responsable del fracaso. La pérdida de sufragios en medios populares se interpretó, desde el interior del peronismo, como "culpa" de los dirigentes sindicales; otros, en cambio, advertían que el movimiento obrero no era el de antes y que el proletariado industrial estaba en franca dilución.

Algunos dirigentes peronistas y otros partidos políticos comenzaron a cuestionar ciertos aspectos del régimen militar, los "excesos" (represión) pero en mayor grado la política económica de Martínez de Hoz. El descontento fue tomando forma y visibilidad. El aumento de precios, los salarios bajos, fueron el acicate de la movilización de amas de casa (concentraciones, días de no compra, marchas de "bolsos vacíos") que ponían en el espacio público nuevas formas de acción; se sumaron los reclamos de deudores de créditos hipotecarios indexados.

Hacia 1982-83 los conflictos sindicales alcanzaban envergadura. Las protestas de maestros, el paro nacional de 1982. Desde antes, los organismos de Derechos Humanos y la acción de Madres, habían creado- en plena dictadura- un embrionario espacio público político que no se limitaba al reclamo de estos derechos fundamentales sino que se extendía a los civiles y a las libertades aniquiladas por la dictadura. A partir de la derrota de Malvinas, las denuncias de estos organismos, encontraron una sociedad "dispuesta a escuchar" (Águila, 2006: 103)⁷.

El derrumbe del "Proceso" se debe al fracaso de la política económica, a las disidencias en el seno de las fuerzas armadas y a la derrota en Malvinas. En la conciencia ciudadana el fin de la dictadura coincidirá con el rechazo a los militares como actores políticos.

La transición democrática

Según Hugo Quiroga (2006:81), entre 1983 y 1987 (durante el gobierno de Alfonsín), la ciudadanía comenzó a sentirse partícipe de los asuntos públicos, apoyó al sistema democrático, se manifestó contra los alzamientos militares, participó en la discusión pública, mostró disposición para movilizarse. Para este autor éstos son rasgos de la "política participativa"; política que comenzará a declinar en 1987, coincidiendo con la derrota electoral del oficialismo, lo que puede entenderse como signo de un deterioro político progresivo. Entre 1988 y 2001 se extenderá la "política representativa" caracterizada por la desmovilización y la toma de decisiones en manos de tecnócratas; en 2001 llegará el tiempo de la "impugnación de la política".

El retorno a la democracia en 1983 marcó un renacimiento de la esfera pública. El intento de recuperar la estabilidad democrática se liga al objetivo de despolitizar a la burocracia militar. El Juicio a las Juntas, en el marco de la "teoría de los dos demonios" se constituyó en emblema del renacido Estado de Derecho en la conciencia pública. Las presiones castrenses que hicieron retroceder los castigos impuestos en el juicio, diluyeron el valor de éste como emblema.

Pero la vuelta a la democracia no fue acompañada de cambios fundamentales en la esfera económica ni en las capacidades estatales. Hacia 1985 el gobierno radical abdicó de las políticas keynesianas y de la crítica a la "patria contratista" e intentó incorporar dirigentes de las corporaciones empresarias a la gestión del Estado y concertar con los grandes grupos económicos. Estas iniciativas no dieron resultado: no sólo no se logró la estabilidad buscada sino que el alfonsinismo terminó en un colapso que puso fin anticipadamente al gobierno radical. El fallido intento de establecer alianzas con los grupos económicos consolidados durante la dictadura, evidenció que se hacía difícil el logro de una mayor autonomía estatal con respecto a presiones de estos actores. Constatamos lo que afirma Weffort⁸ acerca de las "nuevas democracias": son éstas las que vienen surgiendo desde los años 70 en el sur de Europa y en los 80 en América Latina luego del derrumbe de las dictaduras; surgidas de procesos de redemocratización en países en los que la democracia nunca fue realmente sólida, las "nuevas democracias" muestran importantes herencias del pasado autoritario. Estas democracias en proceso de transición, van tomando formas que ponen más énfasis en la delegación que en la representación o en la participación. Atentan contra su consolidación los contextos de marcadas desigualdades sociales que entran en contradicción con la idea igualitarista que toda democracia

⁷ Águila, Gabriela. "La dictadura militar, 1976-83. Política, economía y sociedad." en Águila, Gabriela "De los cordones industriales a la integración del eje MERCOSUR (1940-2005), Tomo XI de la "Nueva Historia de Santa Fe", colección dirigida por Darío Barriera. Prohistoria Ediciones - Diario La Capital, Rosario, 2006.

Gabriela Águila es historiadora, docente investigadora en la UNR.

⁸ Weffort, Francisco. "Nuevas Democracia. ¿Qué democracias?" en Revista Lua Nova N° 27. Centro de estudios de Cultura Contemporánea de Brasil. Citado en Diburzi, Nélida Alonso, Fabiana y Larker, José. Ciencias Sociales. Serie: Material de Estudio del Curso Común Preparatorio para ingresantes a la UNL. Ediciones UNL. Santa Fe. 1998.

encierra (al menos en el plano de la igualdad política de los ciudadanos), así como también los límites al accionar estatal impuestos por los grandes intereses económicos.

En nuestro país estos intereses, los de los actores socioeconómicos predominantes, los llevaron a abandonar su anterior estrategia de asociación con los proyectos autoritarios castrenses y a establecer vínculos con las dirigencias de los partidos políticos mayoritarios, consiguiendo influenciar sobre los gobiernos democráticamente elegidos. Podría decirse que en 1983, sectores empresarios cuya riqueza se había acrecentado durante la dictadura, se encontraban políticamente disponibles (Sidicaro, 2006:42). No es casual, entonces, que el empresariado que pedía la continuidad de la dictadura poco antes, celebrara el triunfo de Alfonsín.

LECTURA

...coherentes con una tradición antidemocrática que identificaba a los peronistas y a los radicales con la "demagogia y el populismo", las principales entidades corporativas patronales, mas allá del balance que hacían de la gestión dictatorial, manifestaron en reiteradas ocasiones la necesidad de prolongar la clausura de la libre expresión de la ciudadanía. Seguramente, las persecuciones del sindicalismo y de las reivindicaciones sociales ocasionaban distintos grados de beneficios a los sectores propietarios según sus tipos de actividades, pero eran medidas a las que apoyaban en tanto formas de restaurar la disciplina social y, más en general, como expresión de revancha social. Las modalidades más violentas asumidas por el terrorismo de Estado no suscitaron en ningún momento objeciones públicas de las principales corporaciones patronales. En el transcurso de todo el septenio, esas entidades empresarias combinaron en sus declaraciones públicas las críticas a medidas puntuales que afectaban en lo inmediato sus ganancias, con el estímulo a la permanencia de los militares en el gobierno, revelando que carecían de capacidad para superar los límites de las preocupaciones por sus ganancias inmediatas y que no tenían interés por la creación de una sociedad medianamente integrada. En lo fundamental, el Proceso fue el punto culminante de las iniciativas tomadas desde mediados de los años cincuenta por los diversos gobiernos militares, y apoyadas invariablemente por las corporaciones patronales, contra la ampliación de la participación política de las clases populares y la mejora en la distribución de los ingresos. Ese era, en realidad, el programa político-social que revelaba el carácter de los actores socioeconómicos predominantes y su falta de proyectos para pensar la sociedad en su conjunto con una mínima vocación de clase dirigente. Si cabe destacar el mencionado aspecto, es a fin de subrayar el hecho de que los sectores empresarios que desde 1983 mejoraron sustancialmente su relación con el sistema político democrático hicieron ese cambio sin que nada permita conjeturar que los movía un replanteo de sus concepciones de la sociedad, de la política y del Estado. Tal como lo veremos, ese giro en sus orientaciones fue la consecuencia de la evidente desintegración del viejo poder castrense, el que, por consiguiente, perdió la posición de actor con eventuales capacidades de determinar la marcha de la vida política nacional.

A partir de 1983, ese heterogéneo y contradictorio conjunto de grandes sectores empresarios, con intereses conflictivos entre sí, sin una óptica de largo plazo que supusiese una mínima vocación hegemónica, se convirtieron en interlocutores privilegiados de los sucesivos gobiernos democráticamente elegidos, y participaron, de diferentes modos según los casos, en la fijación de sus políticas económicas y sociales. Las limitaciones de los intereses de los actores socioeconómicos predominantes habían sido un factor decisivo del fracaso de los distintos gobiernos militares sobre los que habían influido. Las contradicciones y la heterogeneidad de sus intereses sectoriales, sus demandas, que apuntaban objetivamente a producir efectos de desintegración social, sus opciones por las ganancias sin riesgos, en fin, sus aspiraciones y modos de acción, eran netamente opuestos a las formas de construcción de un capitalismo moderno y no podían brindar a los regímenes autoritarios que apoyaban el sustento necesario para instaurar una dictadura prolongada y estable como las que existieron en otros países. Si las elites militares que dirigieron gobiernos nacionales en los períodos 1966-73 y 1976-83 buscaron la asociación con las corporaciones empresarias no fue, evidentemente, por los apoyos que podían transferirles, sino en virtud de una concepción rudimentaria de la política que suponía que si se alcanzaba un buen funcionamiento de la economía las dictaduras podían transformar la situación del país, compensar en lo inmediato su falta de legitimidad y en el mediano plazo transformar la dinámica y los actores del sistema político. Esa concepción simplificadora y economicista de la política no era una idea exclusiva de los militares, era una especie de marxismo de derecha, expuesto sistemáticamente por los intelectuales y economistas que adoctrinaban a los sectores más influyentes de la época, una matriz de inteligibilidad de la política constituida en sentido común, que compartían muchos dirigentes de los partidos políticos mayoritarios. Dadas esas maneras de pensar, cuando fue evidente que ya no había alternativa castrense y se cerraba el ciclo de alternancia cívico-militar, los grandes empresarios

en 1983 se reconciliaron con el sistema de partidos y hallaron una indudable sintonía con los gobernantes civiles que debían enfrentarse con la profunda desestructuración económica y social dejada por la dictadura. Razonando desde la mencionada matriz economicista, muchos de los más influyentes dirigentes políticos creyeron, como lo habían hecho los militares, que la asociación con los principales actores empresarios podía ser la condición para un desarrollo económico y social estable. Así, las ideas y la presencia de los economistas e ideólogos vinculados a los intereses de los actores socioeconómicos predominantes fueron crecientemente aceptadas por los gobiernos democráticos entre 1985 y 2001. Pero, tal como había ocurrido con los gobiernos militares, las demandas e intereses de dichos sectores propietarios, lejos de ser la solución, fueron el problema

Sidicaro, Ricardo. "Sobre algunas consecuencias políticas de la dictadura militar.1976-1983" en Hugo Quiroga y César Tcach (Compiladores). Argentina 1976- 2006. Entre la sombra de la dictadura y el futuro de la democracia. UNL - Homo Sapiens Ediciones. Rosario. Santa Fe. Argentina.2006 - Fragmento

ACTIVIDAD

Sidicaro se refiere en estas páginas a las entidades empresarias, a las que también denomina corporaciones patronales y actores socioeconómicos predominantes. Al respecto:

- ¿Qué cambio señala en su comportamiento político?
- ¿Qué significa que "...hicieron este cambio sin que nada permita conjeturar que los movía un replanteo de sus concepciones de la sociedad, de la política y del Estado"?
- ¿Cuáles habían sido, y seguían siendo entonces, dichas concepciones?

Empresarios y partidos:

El gran empresariado, sin militares a los cuales confiar sus intereses, no contaban tampoco con un partido conservador y se encontraban con que debían relacionarse con el radicalismo o con el peronismo, partidos cuya trayectoria anterior cuestionaban y que habían contribuido a derrocar formando parte de coaliciones golpistas en 1930, 1955, 1962, 1966 y 1976.

A la vez los dirigentes de estos partidos mayoritarios comenzaron a buscar aliados en las filas del capital abandonando aspectos básicos de sus identidades históricas.

El fenómeno mencionado se constituye en uno de los elementos clave para entender el proceso de pérdida de legitimidad de los grandes partidos políticos y con ello uno de los rasgos de la debilidad democrática.

En 1983, sin embargo, se construía la ilusión de una sociedad política democrática en la cual la exaltación de los Derechos Humanos, la condena del Proceso, el rechazo a los militares como actores políticos, marcaría el inicio de una nueva sociedad. En realidad esa democracia tenía pocas bases. En 1987 se produjo la primera desilusión al descubrirse la impotencia del gobierno frente a poderes corporativos, su incapacidad frente a la inflación, al conflicto sindical y al poder militar. Semana Santa de 1987⁹ demostró que el presidente debió ceder ante los militares insubordinados. La desilusión fue con respecto a los dirigentes y, cada vez más, con respecto a la propia democracia.

1989 marcó la otra gran desilusión que hizo que la sociedad aceptara una propuesta mesiánica de quien pediría plenos poderes para enfrentar la crisis y llevar a cabo transformaciones hasta entonces inaceptables que "tenían como objeto el Estado, o lo que quedaba de él" (Romero, 2006:26) ¹⁰.

ACTIVIDAD

Explicá la oración anterior - en negrita-.

⁹Alzamiento militar "carapintada".

¹⁰Romero, Luis Alberto. "La democracia y la sombra del Proceso" en Hugo Quiroga y César Tcach (compiladores). Argentina 1976- 2006. Obra citada

LECTURA

La trayectoria descendente del gobierno de Alfonsín reflejó el permanente deterioro estatal, y la hiperinflación de 1989 reveló el extremo grado de descontrol oficial de la situación económica y social. Sin capacidad para asegurar el valor del signo monetario, las referencias a los precios de los bienes y servicios se volatilizaron, y en los denominados "saqueos" se expresaron, a la vez, los efectos de las descomposiciones del tejido social y del entramado ideológico-jurídico sobre el que se asentaba la propiedad privada. La hiperinflación del fin del alfonsinismo se convirtió en una mención recurrente para justificar la aceptación social del proyecto neoliberal que cerró la etapa del intervencionismo estatal.

La interpretación de los alfonsinistas explicando su caída por una conjura de los actores socioeconómicos predominantes, "el golpe de mercado", no logró impedir el éxito argumental de quienes atribuyeron la "culpa" al Estado y, secundariamente, al gobierno que lo dirigía. Así, la discusión política no se orientó a las posibles medidas para reconstruir los aparatos estatales, sino que giró en torno a cómo deshacer los restos de Estado. Para los grupos económicos de capital nacional y para los diferentes intereses transnacionales con inversiones en el país, la cuestión era de neto carácter material: apropiarse de los patrimonios públicos. Sus intelectuales y propagandistas, especializados durante años en predicar contra la integración social en nombre de las desregulaciones estatales, narraban la "amenaza del borde del abismo" al que supuestamente había conducido el intervencionismo estatal. En la campaña electoral, el más próximo a la sensibilidad neoliberal fue Eduardo Angeloz, el candidato presidencial del radicalismo.

Sidicaro, Ricardo. Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-76/1989-99. Siglo Veintiuno Editores- Argentina, Buenos Aires, Buenos Aires, 2002. Fragmento.

ACTIVIDAD

- Subrayá en el texto las referencias a lo que- a posteriori- va a caracterizar al menemismo.
- ¿Qué ideas serán recurrentes en el discurso menemista para justificar el carácter "salvador" de su gobierno?

Los años '90

La década menemista puede dividirse en dos subperíodos considerando la aplicación del plan de Convertibilidad como línea divisoria; es en el segundo en el que se configura plenamente el "modelo".

Algunos caracteres del primer año de gobierno son la declaración de adopción del "sistema económico popular de mercado" combinando neoliberalismo y rasgos del peronismo histórico. Se planteará la reconciliación con los antiguos adversarios de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la crítica a empresarios enriquecidos con los favores estatales y a la ineficiencia del Estado

"Un sistema económico popular de mercado, debe estar al servicio del pueblo y de la justicia social...debe dejar atrás la arbitrariedad regulatoria...cada uno de los empresarios y de los hombres de negocios en la Argentina, tiene una responsabilidad...decirle no a las prebendas estatales... no a la ley del menor esfuerzo...sin ampararse en un Estado exhausto...Sin temor a la competencias"

Carlos Menem. Mensaje en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, julio de 1989 (Sidicaro, 2002:169).

"Llego a este tradicional ámbito palermitano sin prejuicios ideológicos...El futuro está en el campo. Sin prebendas, tratando nada más de devolver lo que se ha quitado por la vía del control de cambio, de los aranceles, de las retenciones, y las mil restricciones que entorpecieron la exportación...No queremos que nuestro Estado continúe siendo ese 'ogro filantrópico' que todo lo invade, que todo lo entorpece y nada resuelve".

Carlos Menem, discurso en la Sociedad Rural Argentina, agosto de 1989. (Sidicaro, 2002:169-170).

ACTIVIDAD

Teniendo en cuenta los fragmentos:

- ¿Cuál es la actitud del gobierno con respecto al empresariado rural?
- ¿Por qué se afirma -más arriba- que el presidente propone una reconciliación con los antiguos adversarios de la SRA?

Los primeros ministros de economía del menemismo constituyeron lo que se ha dado en denominar el gabinete Bunge y Born, fueron ellos Roig, Rapanelli y González.

Se iniciaron las privatizaciones que favorecerían al gran empresariado pero la inflación, el alza del valor del dólar y la oposición sindical provocaron la disconformidad del empresariado.

Se iniciará el "gobierno de la Convertibilidad" que, suele decirse, duró más que el de Menem.

Es en este período abierto en 1991 en el que se observarán los rasgos que más claramente muestran las diferencias con las políticas del primer peronismo (1946- 1955).

"Así como en 1945 Perón había tenido que reubicarse reubica a la Argentina en el orden internacional bipolar que emergía a partir de los acuerdos de Yalta y el fin de la Segunda Guerra Mundial, nosotros reinsertamos al país en el mundo de la posguerra fría. Percibimos a tiempo el cambio de las circunstancias históricas y la necesidad imperiosa de cambiar la montura para 'cabalgar la evolución'".

Fragmento del discurso pronunciado por Menem en la sede del Consejo Nacional del Partido Justicialista (Sidicaro, 2000:165).

En este fragmento observamos uno de esos rasgos: la sustitución de la Tercera Posición y la identificación de las potencias hegemónicas- EE.UU. en particular- como enemigos con los cuales los "intereses nacionales" entraban en contradicción.

Se trataba ahora de la alineación con los EE.UU. en un contexto de cambios internacionales tras la caída del comunismo soviético y la configuración del mundo unipolar.

En definitiva el "cambio de época" consistía en la aceptación de las políticas impuestas por el sistema económico mundial incorporando las ideas sobre la globalización y las limitaciones de los estados nacionales por los actores internacionales y sus intereses. Menem extremó el discurso globalizador que resultó útil para debilitar aún más las capacidades estatales, debilitamiento que no impidió que el Estado cumpliera la tarea de canalizar ingresos hacia los grupos empresarios emergentes de la concentración y transnacionalización económica capitalista.

El gobierno menemista se desenvolvió en las condiciones que Ulrich Beck considera características de la Segunda Modernidad (Sidicaro, 2000:227). Una de ellas es el debilitamiento del Estado-nación llevado a su desarticulación por los peronistas de 1989. Otra es la desestructuración del mundo del trabajo asalariado bajo las condiciones que surgen de la globalización, la reestructuración de la producción y el uso de nuevas tecnologías, registrándose el aumento de la desocupación y de la exclusión social con el consiguiente debilitamiento del sindicalismo. Una tercera característica es la individualización: los derechos sociales y políticos se orientan a los individuos y no a los grupos; las identidades colectivas entran en crisis.

La opción por las recetas neoliberales del Consenso de Washington fue presentada como la única alternativa. En el modelo menemista gestionado por Cavallo (aunque Menem se atribuía la paternidad) se combinaron la paridad cambiaria, el aumento del endeudamiento externo público y privado con tasas de interés de gran variabilidad y la entrada de inversiones extranjeras para la compra de empresas estatales privatizadas, de firmas nacionales y otros emprendimientos.

Las capacidades estatales siguieron en retroceso. El Estado renunció a la regulación de la moneda y a una de sus funciones como es la de hacer frente a los ciclos económicos aumentando el gasto público en las fases de recesión y disminuyéndolo o recaudando más en las de expansión.

Se logra el control de la inflación, lo que es percibido con alivio por el ciudadano común y acrecienta la confianza del empresariado. Desde el gobierno se habla de los éxitos y de la "entrada al primer mundo". Los medios de comunicación amplifican el discurso oficial y amplias mayorías se convencen de "la marcha hacia la Argentina potencia", una Argentina que pronto mostró que el "modelo" tenía sus vencedores y sus vencidos.

Menem, a diferencia del primer peronismo, adhirió al principio de las leyes del mercado y a la no intervención estatal. Si era el mercado el que premiaba y castigaba, las demandas corporativas dirigidas al Estado, perdían sentido. Los grupos económicos de capital nacional y los nuevos actores empresarios transnacionales, en particular el capital financiero de gran volatilidad, trataban con el gobierno sin necesidad de la mediación de las corporaciones. A la vez, el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el BM (Banco Mundial), con su discurso pro competitividad- para asegurarse el pago de la deuda externa- reducían las decisiones estatales, lo cual expresaba los condicionantes derivados del endeudamiento.

El gobierno, ofreciendo mayores tasas de interés, aseguraba los préstamos para beneficio del capital financiero internacional. La deuda externa se incrementaba y así se conseguían las divisas para mantener la Convertibilidad. Las empresas transnacionales que operaban en el país también necesitaban el flujo de moneda extranjera para girar sus ganancias. Los intereses de la deuda absorbían gran parte del presump-

Fuente: CEP, sobre la base de la revista *Mercado*

ACTIVIDAD

- a) Puntualizá tus conclusiones a partir del cuadro presentado.
- b) Planteá tu opinión con respecto a cómo sería la relación entre el gobierno y los industriales (a partir de las anteriores conclusiones)
- c) Confirmá o no tu opinión, a posteriori del análisis del siguiente texto en el que se plantean las relaciones entre el gobierno menemista y sus políticas con la Unión Industrial Argentina (UIA) que representaba los intereses (aunque heterogéneos) de los empresarios industriales.

El "modelo" y la Unión Industrial Argentina:

Los principios generales del "modelo" recibieron apoyo; la crítica se dirigió a aspectos concretos. No todos los sectores industriales se vieron afectados del mismo modo.

Cavallo dejó muy en claro que el gobierno no se preocuparía por la preservación de las actividades fabriles locales en el marco de la apertura económica irrestricta.

Hacia fin de los noventa la desindustrialización había impactado en establecimientos grandes, medianos y pequeños. Muchos disminuyeron personal y capacidad de producción. El proceso fue desigual: mientras sectores industriales enteros se transformaban o cerraban otros, como la industria metalmecánica, se relocizó y concentró. Sufrieron en particular la industria automotriz, de autopartes y maquinaria agrícola. La industria alimenticia exhibió profundos cambios.

Los industriales plantearon a través de la FUIA (Fundación Unión Industrial Argentina) los riesgos de la política cambiaria adoptada, y la necesidad de acciones estatales de incentivo a las empresas para mejorar la competitividad al integrarse a una economía globalizada (no se podía, según sus posiciones, pasar de un Estado ineficiente a un Estado ausente). Se quejaban también por las altas tasas de interés fijadas por el sector bancario, lo cual dificultaba acceder a los créditos, y por los altos costos de las tarifas de los servicios

Hacia 1999, en la "Propuesta para el crecimiento y el aumento de la productividad", la corporación fabril proponía que las deudas de las empresas al sistema bancario fuesen transferidas al Estado y que éste se encargara de cobrarlas a intereses razonables (la solución "estatista" retomaba la tradicional receta de derivar recursos públicos a las empresas privadas).

En el anuario 1994-95 de la UIA se planteaba que la industria había enfrentado su reconversión con crédito caro y sin que el Estado (a diferencia de otros países, incluidos los líderes de las políticas de libre mercado) tomara medidas, como por ejemplo, para evitar el dumping. Todo esto, sin cuestionar las bases del "modelo".

A la vez, los crecientes porcentajes de desocupación y la flexibilización laboral agudizaron las críticas sindicales. Crecían el cuentapropismo y la economía informal.

ACTIVIDAD

- a) Donde vivís, ¿era/es una zona industrial?
- b) Consultá con tus padres, abuelos, profesores, si en tu localidad se produjeron cierres de fábricas o talleres. Si fue así, tomá un caso y describí: el tipo de establecimiento, la cantidad de trabajadores que ocupaba y su destino a posteriori del cierre.
- c) Si vivís en una zona netamente rural, caracterizála en el presente y constata si hubo cambios en la economía y en los aspectos sociales en los últimos 20 ó 30 años. Volvemos a pedirte que preguntes a adultos (jóvenes y mayores). Podrás integrar la información que obtengas con el siguiente texto.

Las corporaciones rurales y el "modelo":

Los productores agropecuarios, localizados en diferentes regiones geográficas, con distintos tipos de producción, estaban afiliados a entidades rurales que representaban determinados intereses.

El gobierno de Menem -en términos generales- favoreció a las entidades tradicionales, sin incentivar pequeñas y medianas empresas. Se produjeron asimetrías crecientes entre regiones y entre localidades de una misma región.

Desde los años 80 el mercado agrícola presentaba oscilaciones. Retrocedían cereales y cultivos industriales y crecía la producción de girasol, sorgo y soja dada la importante demanda; se configuraba así el sector más dinámico del campo argentino. Éste requería insumos importados, agroquímicos, fertilizantes,

semillas modificadas genéticamente y también, cuantiosas inversiones de capital. Fue en aumento el control tecnológico y comercial de las empresas oligopólicas transnacionales, dado el costo de la reconversión productiva.

La superposición de entidades agropecuarias dificultaba la negociación ya desde el gobierno de Alfonsín. Durante la vigencia del modelo menemista, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), tuvieron actitudes ambiguas: adhirieron al proyecto neoliberal y criticaron, algunos de sus efectos. Esto tiene que ver con que la política menemista afectó de manera desigual a los distintos tipos de empresarios rurales.

Por un lado la estabilidad monetaria daría al agro mejor acceso a los créditos, y la apertura económica abarataría los insumos tecnológicos importados requeridos para modernizar la producción y mejorar la competitividad; el "ciclo virtuoso" se cerraría con el aumento de los rendimientos y saldos exportables. Además sobre todo este ciclo operaría favorablemente la supresión de las retenciones.

Estas consideraciones, sin embargo, se contradecían con algunas realidades: los Estados de los países centrales intervenían sobre los precios internacionales; la inflación aunque era baja operaba sobre los precios internos de bienes que el agro requería. Se sumaba una cotización del dólar que las entidades ruralistas consideraban que no era favorable para el sector exportador. La caída de los precios internacionales de los productos que se exportaban aumentaron las quejas; quejas que se intensificarán cuando en 1998-99 vuelvan a bajar estrepitosamente.

El reclamo agrario se agudizó; pidieron la reducción de los impuestos internos, la del gasto público. Se criticó más abiertamente al "gasto de la política", al clientelismo.

La realidad mostraba profundas transformaciones en la estructura productiva rural, por ejemplo algunas producciones regionales (como la láctea) se habían modernizado y eran competitivas; otras como la ganadería veían con mucha incertidumbre su futuro. CRA intentó reflejar las posiciones de los sectores más perjudicados pero también agrupaba a productores favorecidos.

Otro factor de diferenciación entre los empresarios rurales fue la desigualdad en las posibilidades de acceso al crédito y con ello a la modernización (incorporación de nuevas tecnologías, por ejemplo). A la vez, el empresariado rural se estaba modificando por la presencia de nuevos actores. Grandes grupos, como Pérez Companc, invertían en el agro; empresarios que habían vendido sus empresas (como Terrabusi), también Georges Soros (a través de Irsa), Benetton, entre otros, compraban miles de hectáreas en las zonas de mejores tierras.

Algunos dirigentes, incluidos los de la tradicional SRA, parecían querer lo que siempre criticaron: una mayor intervención del Estado y, como ya era tradición, confundían sus intereses con los de la "patria" y el pueblo o la nación toda (el presidente de la SRA Enrique Crotto, expresó, en una clara crítica a la dirigencia política, que se necesitaban nuevos dirigentes que quisieran una patria en serio, donde gane la gente y no un partido).

Las medidas de fuerza de los ruralistas no se hicieron esperar: un lockout patronal en abril de 1999. Esbozaban posiciones contra la Convertibilidad, aunque sin plantear su finalización. El presidente Menem endureció sus posiciones en relación al agro. Se terminaban, hacia final de su mandato, los buenos presagios de años atrás con respecto a la relación entre el nuevo peronismo y las entidades agrarias. Incluso una delegación de "hombres de campo" pedía audiencia a una alta funcionaria del FMI (Teresa Minassian), muestra de que entendían que el poder de decisión se hallaba fuera de las fronteras nacionales. Aparentemente coincidían con el FMI en aspectos como la racionalización del presupuesto y la baja del gasto público; pero la gran diferencia en sus posiciones estribaba en que para los ruralistas lo que el Estado ahorrraba debía destinarse a mejorar su situación y para el Fondo, a pagar la deuda externa, ésta era la finalidad del "ajuste" (el Fondo actuaba como lo que era: un organismo del gobierno de EE.UU preocupado por las inversiones de sus empresas, además de acreedor directo de los préstamos acordados a Argentina.).

LECTURA

Perdedores y ganadores

La experiencia menemista de gobierno cambió la topografía de los grandes actores socioeconómicos y buena parte de quienes habían avalado su comienzo no encontraron los beneficios esperados. La prédica liberal de las corporaciones tradicionales había sido, en buena medida, una identificación general con slogans ideológicos que les acordaba cierto grado de unidad para criticar al intervencionismo estatal pero no las dotaba de un proyecto de gobierno. Los grupos económicos nacionales, desarrollados al amparo de las prebendas oficiales, no tenían, tampoco, mayores convicciones liberales ni interés en competir en mercados abiertos; y las referencias de sus titulares a la necesidad de que los gobiernos no obstaculizaran el desenvolvimiento de algunas de sus actividades, las contradecían clara y frecuentemente con sus demandas de asistencia estatal. Las empresas transnacionales radicadas desde hacía tiempo al amparo de los

mecanismos proteccionistas podían ser favorables a la libre transferencia de sus ganancias o a la liberalización de las relaciones laborales, pero, en términos generales, los mecanismos intervencionistas las beneficiaban.

Desde hacia varias décadas, las estimaciones de las llamadas "fugas de capitales", de los porcentajes de la "economía en negro", de las magnitudes de la evasión impositiva, de la inoperancia de los controles aduaneros, de las transgresiones de las leyes del trabajo, de las venalidades de los sistemas públicos de inspección tributaria, de las licitaciones "arregladas" con los proveedores gubernamentales, y la enumeración no se agota, revelaban que las capacidades estatales en crisis no obraban como el guardián técnicamente idóneo y éticamente incorruptible del "interés general". De allí que los actores socioeconómicos que operaban en el país en 1989 no se hallaban "agobiados" por un Estado omnipotente y omnipresente, al cual los más imaginativos de sus voceros comparaban con el soviético. En varias cuestiones, el neoliberalismo de la gestión menemista convirtió en legal lo que era real, y no introdujo enormes rupturas con la laxitud ante el cumplimiento de normas sólo formales, cuyo control no era asegurado por la debilidad del Estado. En esas condiciones de intervencionismo "permisivo" es muy probable que los principales sectores empresarios imaginaran, a la luz de sus propias prácticas, que con el proyecto menemista se pasaría a un neoliberalismo "permisivo", con aparatos estatales que sincerarían sus crónicas incapacidades mediante un vernáculo dejar hacer, dejar pasar.

En el curso del decenio analizado, la disconformidad de las corporaciones tradicionales con el menemismo creció más allá de sus coincidencias con lo que denominaban sus principios filosóficos. Poco a poco, la distancia se fue ampliando, pero las dificultades económicas de amplios sectores del empresariado no podían ser interpretadas por sus dirigentes empleando las viejas claves de inteligibilidad de las relaciones Estado-sociedad ni, menos aún, en la anticuada dicotomía entre populismo y liberalismo. Las teorías de la autorregulación del mercado les adjudicaba, si eran coherentes, el rotulo de ineficientes. Mas benévolo consigo mismos, los dirigentes fabriles y los agrarios apuntaron contra los excesos del capital financiero; las objeciones a las protecciones comerciales norteamericanas y europeas, así como el dumping internacional los condujo a observaciones propias de los antiimperialistas de otras épocas, y formularon erráticamente nostálgicas demandas de más Estado frente a las consecuencias negativas de la competencia de las importaciones.

Los ganadores no faltaron en las filas del empresariado nucleado en las entidades tradicionales y, en cierta medida, su presencia nutrió la ambigüedad de las declaraciones y de las propuestas cuando se trató de buscar alternativas al "modelo". En términos de las relaciones con los asalariados, fueron generales para todos los empresarios los beneficios obtenidos con el retroceso de las legislaciones de protección social y con el deterioro de las estructuras gremiales, si bien en ese tema el menemismo suscitó muchas frustraciones por ceder a las presiones de sus aliados sindicales. La mayoría de los medianos y pequeños industriales que consiguió subsistir tendió a abaratar costos perjudicando a sus asalariados y contratando trabajo "en negro", razones por las cuales les resultaba imposible establecer alianzas proteccionistas con los sindicatos, preocupados por las pérdidas de empleos provocados por las importaciones. La heterogeneidad de los grupos económicos nacionales hizo que las consecuencias de las políticas neoliberales los afectaran de modos disímiles. Los diferentes tipos de actividades que realizaban las empresas controladas por un mismo grupo se vieron, igualmente, impactadas de manera desigual por la apertura, y si las que se desenvolvían en el sector servicios quedaron protegidas, otras, en cambio, perdieron posiciones o fueron vendidas a capitales transnacionales. La consolidación de las filiales de los bancos extranjeros perjudicó, como las corporaciones tradicionales lo repitieron con frecuencia, a los productores agrarios y a los industriales, cuyo endeudamiento creciente los convirtió en críticos de las excesivas ganancias del capital financiero internacional.

Los inversionistas transnacionales, que obtuvieron niveles de beneficios superiores a los que encontraban en otros países, y los organismos internacionales de supervisión de políticas estatales, cuya influencia en las tomas de decisiones políticas fue en aumento a lo largo del decenio menemista, fueron los ganadores indiscutibles del periodo. Las respectivas ganancias fueron de disímiles características, en dividendos para las empresas, en carrera y dinero para sus managers, en promociones burocráticas y mejoras salariales para los funcionarios del Fondo o del Banco Mundial, y en demostración de poder internacional para los gobiernos de los países centrales. Todos esos ganadores sostuvieron el "modelo", que era la garantía de los ingresos empresarios en dólares y la muestra de su éxito profesional para los funcionarios de los organismos mundiales de "ayuda desinteresada a los países en vías de desarrollo".

Por su historia, el peronismo tenía más proximidad con los empresarios perdedores de los años 1989-1999 que con los ganadores. Pero fue con estos últimos que Menem pudo establecer la convergencia que le brindó sustento a su prolongada presidencia y preservar así los cargos y los beneficios materiales y simbólicos alcanzados por los jefes y figuras menores de su movimiento, y los obtenidos por sus aliados provenientes

de pequeños partidos neoliberales de escasos sufragios. Entre los integrantes de las administraciones provinciales peronistas se encontraron, también los que ganaron y los que perdieron con las políticas neoliberales. Exigidos por las políticas de ajuste o limitados por los compromisos del endeudamiento público, no pocos dirigentes provinciales vieron caer sus redes clientelares y algunos sintieron, sin metáfora, que se hacían humo sus residencias. Frente a ellos, la desocupación y el avance de la desigualdad social dieron lugar a la aparición de las revueltas protagonizadas por los actores populares posperonistas.

Sidicaro, Ricardo. Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-76/1989-99. Siglo Veintiuno Editores- Argentina, Buenos Aires, Buenos Aires, 2002. Fragmento

ACTIVIDAD

Esta actividad tiene algo de juego: te proponemos hacer un listado de los ganadores asignándole un puntaje de 1 a 10 según hayan sido mayores o menores los beneficios que obtuvieron durante el menemismo. Deberás fundamentar el puntaje que les asignes.

Con respecto a los perdedores, compará la situación de los asalariados con la de los desocupados.

A continuación de esta actividad analizaremos los comportamientos electorales de "ganadores" y "perdedores" durante los años del menemismo.

Siguiendo el ya citado esquema teórico que propuso Ulrich Beck para distinguir la Primera Modernidad de la Segunda, observamos como rasgos de la primera una sociedad constituida en los marcos del Estado-nación, integrada, con pleno empleo, confiada en el progreso, en la cual se ampliaban los derechos sociales y políticos. Muchos de estos rasgos son los que caracterizaron a la sociedad que se configuró en nuestro país entre los '40 y '70, mediante las políticas del peronismo fundador (1946-55). En el menemismo, el "modelo", sustituía plenamente esta sociedad. Los dirigentes peronistas del 89 en tanto, gozaban de los beneficios materiales y simbólicos que les otorgaban los cargos públicos que ocupaban: ¿Cómo pensar entonces los apoyos políticos populares, el "voto peronista" de los asalariados?, ¿independiente con respecto a los beneficios sociales?, ¿cómo un comportamiento tradicional que disociaba intención de voto y distribución de ingresos y otros beneficios?

En el decenio menemista el sufragio por el peronismo de los sectores populares expresó conductas electorales tradicionales (Sidicaro, 2002:243) no modificadas por las pérdidas en ocupación, ingreso, salud y educación provocadas por la opción neoliberal del gobierno; aunque las muestras de adhesión (y en particular a través de la presencia de las masas en la Plaza, gran símbolo del peronismo fundador y rasgo característico de la relación con Perón como líder) fueron de baja intensidad.

Al mismo tiempo sectores contrarios al peronismo histórico y que registraban mayores ingresos y los que eran beneficiarios del "modelo" fueron el sostén del menemismo, pero sólo coyunturalmente, ya que estaban dispuestos a retirarlo apenas sus intereses así lo aconsejaban (visible en las maniobras del gran capital especulativo muy volátil y también en otros actores socioeconómicos).

En 1999 estos sectores no dieron su voto al candidato peronista sino a la fórmula que parecía asegurar mejor la continuidad del "modelo".

Los sectores perjudicados, si bien mantuvieron su apoyo electoral tradicional, empezaron a mostrar - en particular en algunas provincias- su oposición a los políticos menemistas en el gobierno local; incluso agrediéndolos, a ellos, a sus bienes y a los símbolos del asiento del poder (el caso más ilustrativo es el llamado "santiagueñazo"). Estos políticos de todos modos no perdieron sus cargos y respondían al estallido y la ira popular con mecanismos asistenciales, tratando de neutralizar la protesta.

El nexa entre el gobierno y la población pobre fue cada vez más "cara a cara" sustituyendo la acción desde el Estado. Esta relación clientelar les sirvió a muchos dirigentes nacionales, provinciales y municipales para disputar electoralmente, constituyéndose en un factor del respaldo de los sectores populares al menemismo. Estos sectores ya se hallaban fragmentados como actores colectivos como consecuencia del neoliberalismo, de lo cual da cuenta la caracterización de los "perdedores" ya planteada.

El aumento de la pobreza y de la marginación acentuó las prácticas clientelares, constitutivas de una forma de hacer política. El uso de los recursos públicos que permite el intercambio clientelar hizo posible la construcción de una red de lealtades personales, vínculos forzosos, que evidencian y acrecientan la vulnerabilidad de los individuos y que condicionan el ejercicio de la ciudadanía.

Por otra parte, los dirigentes sindicales, frente a la pérdida de derechos laborales e ingresos, lograron acuerdos con el gobierno en ciertas oportunidades; pero se quedaron sin el "garante" estatal y sin posibilidades de influenciar en las decisiones oficiales. Así la demanda del empresariado y de los organismos financieros internacionales quedaba satisfecha.

A pesar de que, durante la mayor parte del período, no hubo grandes conflictos entre el sindicalismo oficialista y las corporaciones patronales, fueron aumentando las huelgas y protestas, especialmente en el interior del país.

Retomando la periodización que se abre con el retorno a la democracia, la década menemista corresponde a lo que denominamos "política representativa": la participación ciudadana iba siendo sustituida por la representación política, fenómeno observable desde 1987, en particular (Quiroga, 2006:84).

Un nuevo actor, la televisión, participa en el quehacer político; esto se hace más visible desde la campaña electoral de 1989. La relación entre la población y la política se da más a través de los medios que en el espacio público (la plaza, la tribuna, los actos). Menem fue un alto exponente de esta mediatización de la política (la política como espectáculo), contraria a un discurso político racional, argumentativo; éste no era lo requerido por el modelo de comunicación mediático.

El desprestigio de la política crece y da cuenta de ello el "éxito" de figuras que no tenían antecedentes de accionar político sino que provenían del mundo artístico o deportivo y que fueron convocadas como extrapartidarias para representar a la sociedad. Aparecían como una expresión de la "antipolítica" (en realidad de lo que se trataba era de la "política de la antipolítica"). Palito Ortega, Daniel Scioli y Carlos Reutemann son buenos ejemplos, también lo es la mayor importancia que los votantes asignan a las personas (los candidatos) que a los partidos. Conjuntamente se operaba un desplazamiento del "hombre político" por los técnicos en la toma de decisiones (Cavallero, Roque Fernández, por ejemplo.).

Los ciudadanos protestaban desde su ámbito privado (apagones, bocinazos), sin involucrarse en actos públicos. Todos éstos son rasgos que evidencian las transformaciones en el formato tradicional de la política.

Las elecciones de 1999 muestran algunos de estos rasgos y en particular la disponibilidad política de los actores empresariales. La UIA, CRA y la Cámara de la Construcción, forman el Polo Productivo que divide sus apoyos entre peronistas y radicales - las dos fuerzas con mayores posibilidades de éxito-, sin pretender cambiar el modelo. La UIA apoya la candidatura a diputado de Eduardo Duhalde a la vez que ve con simpatía al jefe de los economistas de la Alianza UCR-Frepaso que postulaba a Fernando de la Rúa. Se trata de Machinea, que representará la continuidad de la convertibilidad que favorecía los intereses transnacionales al preservar sus ganancias en dólares. Se evidencia que la llegada de éste al Ministerio de Economía no permitió al gobierno de la Alianza - no supo o no pudo- hacer una política diferente al "modelo" y que "la presidencia de la convertibilidad" como dijimos, fue de mayor duración que la de Menem (Sidicaro, 2002:212-13).

Poco después se abrirá la impugnación a la política.

2001 representa la tercer gran desilusión en una sociedad empobrecida y polarizada. El cuestionamiento a la clase política, expresada en el "que se vayan todos", mostraba una democracia no sólo impotente sino que aparecía como responsable de la debacle, de la miseria, de la desigualdad. Aunque en 2003 reciba un moderado voto de confianza "...es posible que la crisis haya confirmado que aquella democracia imaginada en 1983 es en realidad una flor exótica en la Argentina actual..." (Romero, 2006:27)

Las acciones colectivas de diciembre de 2001 tradujeron el gran malestar con el gobierno, con los políticos y con la política en general. Los dirigentes políticos no podían circular libremente por las calles; el Congreso fue vallado. Los cacerolazos, asambleas vecinales, la ocupación por sus trabajadores de fábricas quebradas, las protestas de los piqueteros y otras múltiples y novedosas formas de acción colectiva - que si bien breves y fragmentadas habían salido a luz durante el menemismo- ahora se intensificaban.

Lo que colapsaba en 2001 era el régimen económico, social y político forjado básicamente en los 90. Por primera vez un gobierno fue desalojado por la movilización social y no por un golpe de Estado. El desempleo, la recesión, la pobreza extrema, el crecimiento de la deuda externa, la paralización del aparato productivo marcaron el agotamiento del "modelo". Las restricciones a las transacciones bancarias (el "corralito") y a la obtención de dinero de las cuentas sueldo por parte de los trabajadores, no sólo afectaban a éstos y a los ahorristas sino que paralizaban la actividad económica. Fueron días de furia popular y de represión. La declaración del estado de sitio por parte del presidente De la Rúa exacerbó aún más los ánimos. Al día siguiente se conocía su renuncia.

Cabe preguntarse si la etapa que se abre a posteriori, con la sucesión de presidentes provisorios, el fin de la convertibilidad y las nuevas expectativas que se insinuaban, permitiría seguir hablando de la impugnación de la política; o si las elecciones presidenciales de 2003 podrían marcar su finalización (Quiroga, 2006:87).

En un contexto de desinstitucionalización de la política (asambleas populares, participación directa, las calles como ámbito de participación política- lo que para Quiroga es una política recuperada con otro formato que hace que se pueda pensar en un retorno a la participación-), el presidente Kirchner se apoya en una democracia de opinión pública, en la cual el poder se personaliza reduciéndose el campo de actuación del Parlamento (y con ello este espacio de deliberación pública)

Desde 1989, en los difíciles momentos del recambio presidencial, lo que se observa es el decisionismo democrático (ejercicio de poderes excepcionales, escasa separación de poderes y controles mutuos, el veto del ejecutivo, los decretos de necesidad y urgencia. Nada de esto es inconstitucional, pero - sobre todo si no tiene el carácter transitorio que la Constitución establece- pone en riesgo al Estado de Derecho y a la propia democracia). El decisionismo, favorecido por la tradición hiperpresidencialista y por una visión populista del liderazgo, fue también visible en la política tendiente a disciplinar y/o cooptar las voluntades disidentes durante el kirchnerismo.

Los últimos años

Kirchner se apropió del creciente discurso antiliberal (que a la vez se extendía en Latinoamérica) y que había acompañado a las movilizaciones y nuevas formas de acción colectiva que lo precedieron. Al mismo tiempo representaba la aspiración de retorno a la normalidad y parecía marcar un quiebre con la gestión menemista. Este quiebre parecía claro en algunas de las medidas tomadas como el descabezamiento de la cúpula militar, el recambio en la Corte Suprema, la condena a las violaciones de los Derechos Humanos (que alcanzó su punto culminante en 2005 con la derogación de las leyes de punto final y la reanudación, aunque tíbilmente, de juicios a militares responsables de delitos de lesa humanidad) y el impulso a la política de la memoria en torno a los años 70.

Posteriormente a la devaluación, empezaron a hacerse visibles los signos de recuperación industrial, el crecimiento económico, el superávit, todo ello acompañado de una nueva etapa de ilusión, o al menos de expectativas. Fueron favorables las que despertó el canje de la deuda con los acreedores privados, el cancelamiento de la mantenida con el FMI, sin por ello desconocer el peso enorme que todavía representan los servicios de la deuda externa. Estos aspectos, sin embargo, no pueden ocultar que el crecimiento fue desigual, sin redistribución, con una brecha social 35% más amplia que en los años 90. Tampoco se pueden minimizar otras prácticas como la presión a gobernadores y legisladores para obtener adhesiones y votos favorables a través de los fondos dispuestos por el Estado nacional o la obra pública financiada por la Nación.

Otro rasgo de la política kirchnerista tendiente a edificar poder es la cooptación de organizaciones sociales (piqueteras, de Derechos Humanos, de fábricas recuperadas); algunos sectores de estas organizaciones van ocupando, a través de sus líderes, lugares destacados en el gobierno y con su capacidad de movilización dan apoyo al proyecto gubernamental.

Ya desde la crisis y el gobierno provisorio de Eduardo Duhalde (2002-2003) los subsidios a desempleados desbordaron el universo piquetero al aumentar de 700.000 a casi 2 millones con el plan Jefas y jefes de hogar desocupados. Esta política de masificación de la ayuda social se continuó con Kirchner intentando recuperar el espacio perdido por el peronismo en manos de las nuevas organizaciones territoriales (Svampa, 2008:49)¹¹.

Desde el gobierno y desde los medios de comunicación, se empezó a acusar a organizaciones piqueteras, en particular las no oficialistas (que confrontaron movilizándose entre 2003 y 2005), de manejos clientelares y manipulación política cuestionando su dependencia del Estado; esto fue provocando su deslegitimación, en tanto dicho mensaje tuvo gran consenso en la opinión pública, en particular en las clases medias que poco antes veían a los excluidos como posibles compañeros de ruta ("piquete y cacerola, la lucha es una sola" se oyó en las jornadas del 2001). Algunas de las organizaciones críticas al gobierno ligadas a partidos de izquierda fueron disciplinadas, a la vez que la demonización y judicialización de la conflictividad ganaba, también, consenso en la opinión pública. Centro y suburbios, Buenos Aires y Conurbano (asiento de las "clases peligrosas"), se dicotomizaban cada vez más.

Svampa sostiene que la matriz asistencial selló las fronteras de la exclusión al legitimar la "inclusión de los excluidos como excluidos". (Svampa, 2008)

Si el gobierno, para preocupación de algunos sectores parecía abonar ilusiones populistas, con lo anterior quedaría demostrado que no era éste el rumbo elegido. Más aún, la distancia con el populismo se confirmaba con las medidas y acciones tendientes a desactivar la movilización y, en particular, con la alianza con sectores conservadores- como fue la operada con los llamados radicales K en 2007-.

Con respecto a los trabajadores ocupados siguieron viendo los efectos de la precarización iniciada claramente con las leyes del menemismo y con otras como la llamada "Ley Banelco" del 2000. La precarización había provocado movilizaciones defensivas, del sector público en particular. Había quebrado las solidaridades sociales y laborales entre los trabajadores. El desempleo mostraba índices en baja, pero sin dejar de ser un problema grave. El trabajo no registrado, en plantas transitorias, el sistema de contratos y pasantías,

¹¹Svampa, Maristella, Cambio de época. Movimientos sociales y poder político. Siglo Veintiuno Editores - FLACSO coediciones. Buenos Aires. 2008.

todo ello muestra las "fronteras de la precariedad" y más aún las evidencias - que de tanto en tanto la TV aporta- de trabajo clandestino y esclavo (en la construcción, la industria textil, y en particular con mano de obra de inmigrantes de países limítrofes).

A pesar de esto la conflictividad sindical fue baja, al menos hasta 2005.

Desde entonces, en un contexto de crecimiento de la economía y aumento de la inflación, las demandas de mejoras salariales se incrementaron mientras la precariedad laboral se desnaturalizaba. Los conflictos sindicales se multiplicaron. La CGT parecía cobrar vida después de años de desmovilización, vinculándose con el gobierno kirchnerista en un estilo que oscilaba entre la dependencia y la presión. La CTA aparecía como actor secundario desdibujado. Los conflictos mostraron el protagonismo del sector público (salud y educación) con escasa posibilidad de alcanzar dimensión nacional.

El modelo extractivo- exportador (extracción de recursos naturales no renovables), inserto en una nueva división del trabajo en el contexto del capitalismo actual, se ha profundizado; a pesar de que la gestión kirchnerista reorientó parcialmente el modelo, vía reactivación de la industria. Los agentes del capitalismo global encontraron posibilidades para concretar su expansión incluyendo áreas marginales con reservas energéticas y mineras (minería a cielo abierto, por ejemplo, que ha provocado importantes luchas socio-ambientales y reclamos por la activación de mecanismos de consulta popular previstos en la reforma constitucional de 1994, con la finalidad de detener proyectos que consideran altamente perjudiciales).

Finalizamos con una actividad que se basa en la idea de Svampa acerca de las fronteras que fueron marcando los límites de la gestión de Néstor Kirchner: la de la exclusión, la de la precariedad y la de la política institucional. Por lo cual, mirando hacia los años 90, es posible advertir líneas de ruptura pero también continuidades.

ACTIVIDAD

Sobre la base del texto "Los últimos años":

a) Completar el cuadro

Límites de la gestión Kirchnerista	Rasgos
Frontera de la exclusión	
Frontera de la precariedad	
Frontera de la política Institucional.	

b) Señalar a los aspectos en los que pueden observarse las rupturas aludidas y aquellos en los que se advierten continuidades.

Bibliografía

-Águila, Gabriela. "La dictadura militar, 1976-83. Política, economía y sociedad." en Águila, Gabriela De los cordones industriales a la integración del eje MERCOSUR (1940-2005), Tomo XI de la "Nueva Historia de Santa Fe", colección dirigida por Darío Barraera. Prohistoria Ediciones - Diario La Capital, Rosario.2006.

-Diburzi, Nélida, Alonso, Fabiana y Larker, José. Ciencias Sociales. Serie: Material de Estudio del Curso Común Preparatorio para ingresantes a la UNL. Ediciones UNL. Santa Fe. 1998.

-Quiroga, Hugo, "La política en tiempos de dictadura y democracia", en Hugo Quiroga y César Tcach (compiladores), Argentina 1976-2006 Entre la sombra de la dictadura y el futuro de la democracia. UNL - Homo Sapiens Ediciones. Rosario. Santa Fe. Argentina.2006

-Romero, Luis Alberto. "La democracia y la sombra del Proceso" en Hugo Quiroga y César Tcach (compiladores), Argentina 1976-2006 Entre la sombra de la dictadura y el futuro de la democracia. UNL - Homo Sapiens Ediciones. Rosario. Santa Fe. Argentina.2006

-Sidicaro, Ricardo. Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-76/1989-99. Siglo Veintiuno Editores - Argentina. Buenos Aires. 2002

-Sidicaro, Ricardo. "Sobre algunas consecuencias políticas de la dictadura militar.1976-1983" en Hugo Quiroga y César Tcach (Compiladores). Argentina 1976- 2006. Entre la sombra de la dictadura y el futuro de la democracia. UNL - Homo Sapiens Ediciones. Rosario. Santa Fe. Argentina.2006

-Svampa, Maristella, Cambio de época. Movimientos sociales y poder político. Siglo Veintiuno Editores - FLACSO coediciones. Buenos Aires. 2008.